Editorial

JOSÉ LUIS CARBAJO
Director

La descentralización del país está muy lejos de ser un tema de agenda de las fuerzas políticas que conforman el Ejecutivo y el Legislativo. Tampoco parece tener especial interés para la oposición al Gobierno; y la población, desencantada por los actos de corrupción de autoridades nacionales y regionales, ha perdido la fe en sus gobernantes. Se ha envilecido la política como acto de gobernanza y construcción de la democracia.

Vivimos en un ambiente de desconfianza que difícilmente se podrá revertir. Tiempos de incertidumbre por el nivel de corrupción que se viene descubriendo y que tiñe la agenda del país. El Gobierno va a tener que hacer más y hablar menos para cambiar esta situación, para acercar con transparencia la política del Estado a las necesidades de la población. En este contexto, lo más probable es que la descentralización no tenga prioridad para el Gobierno y que solo veamos avances sectoriales de transferencia de funciones a los gobiernos regionales de parte de los ministerios de Educación y de Salud.

Si se hace un balance de estos catorce años desde que se inició el proceso de descentralización, se concluye que se ha avanzado poco, con tendencias "dominantes" a la desconcentración: los sucesivos gobiernos nacionales han preferido ejecutar las políticas directamente, abandonando su rol rector, probablemente para lograr mayores réditos políticos.

Las necesidades de la población, y la urgencia de atender los problemas estructurales del país, nos ponen frente a desafíos de corto y largo plazo y nos llevan a replantearnos la manera de gobernar; tenemos que buscar el equilibrio entre políticas de efecto y procesos más de fondo como la descentralización, porque es necesario fortalecer la institucionalidad y la gobernanza.

En la apuesta por descentralizar el país han participado los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pero las instancias de planeamiento y el gobierno nacional han aprovechado poco para consolidar estas experiencias. En Educación, por ejemplo, ambos niveles de gobierno han hecho sus proyectos educativos, se han elaborado propuestas curriculares y modelos de gestión, pero no se ha buscado que éstas fluyan con recursos y transferencia de competencias para que se consoliden.

Necesitamos construir nuevos consensos para avanzar hacia una auténtica descentralización. El Acuerdo Nacional puede ser una instancia de concertación y trabajar para alcanzar uno de sus cuatro objetivos: un Estado eficiente, transparente y descentralizado, que plantea "garantizar autonomías políticas y administrativas, basadas en la descentralización del poder que implica la transferencia gradual de las competencias y recursos del gobierno regional". Lograr este nuevo consenso exige establecer un marco de políticas que devuelvan la confianza a la población y que empoderen a ciudadanos y ciudadanas para que elijan y fiscalicen, de modo que las autoridades hagan obras y no roben.